

## SESIONES DE PRORROGA

1994

## Supl. (3) al ORDEN DEL DIA N° 1216

SUMARIO: **Observaciones** formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, contenido en el Orden del Día N° 1.216. **Bravo.** (68-D.O.-1994.)

Buenos Aires, 20 de febrero de 1995.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.*

S/D.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento de la Honorable Cámara vengo en tiempo y forma a observar el Orden del Día N° 1.216.

Formulo las pertinentes observaciones sin perjuicio de ampliar sus fundamentos en el momento de tratarse en el recinto.

Con respecto al título I considero que debe fijarse expresa y claramente en el texto legal la definición de pequeña y mediana empresa.

Es innecesario extendernos sobre la importancia de la determinación de las empresas a quienes se les aplicara la categoría de pequeñas y medianas, así como lo inconveniente de otorgar dicha facultad a organismos administrativos.

El título I es un conjunto de enunciados cuyo cumplimiento es incierto y la metodología a aplicar para lograrlos no aparece claramente expuesta.

El título II tiende a la creación de grupos financieros, para la ayuda de la pequeña y mediana empresa, con un criterio netamente economicista, que no contempla la modificación del régimen tributario regresivo o las tarifas monopólicas de las diversas empresas de servicios públicos.

El título III determina la destrucción total y absoluta del derecho laboral, al eliminar el carácter de orden público de normas laborales fundamentales.

Se pretende ignorar el carácter protectorio del derecho laboral, argumentando la necesidad de bajar el costo argentino y desconociendo que la crisis de las PYMES obedece a la implementación del actual modelo económico, con sus consecuencias de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, desocupación, alto costo crediticio, elevada presión fiscal, etcétera.

Este título constituye un ataque a derechos y conquistas sociales fundamentales. La protección contra el despido arbitrario, las fechas de vacaciones, el pago del aguinaldo, etcétera. Todo se ve afectado por la presente norma, en perjuicio del trabajador.

Entendemos que el propuesto, no es el camino adecuado para resolver el problema del desempleo, que obedece a profundas causas estructurales.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, desconoce la desigualdad social que fundamenta la existencia del derecho del trabajo y mas que solución al desempleo, conduce a la arbitrariedad del más fuerte y la generación de nuevos conflictos.

Por ello, y reiterando la reserva de derecho para ampliar y fundamentar mi posición en el recinto dejo formulada la observación al Orden del Día N° 1.216.

*Alfredo Bravo.*

## SESIONES DE PRORROGA

1994

## Supl. (4) al ORDEN DEL DIA N° 1216

SUMARIO: Observaciones formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, contenido en el Orden del Día N° 1.216. Molinas. (69-D.O.-1994.)

Buenos Aires, 20 de febrero de 1995.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.*

S/D.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo del Reglamento de la Honorable Cámara, vengo en tiempo y forma a observar el Orden del Día N° 1.216.

La forma vertiginosa impresa a la aprobación del dictamen de mayoría y su no menos vertiginosa orden de impresión, no permitió que suscribiera en disidencia el despacho referido, no obstante haber asistido a la reunión de comisión.

Es por ello que vengo a formular la pertinente observación, sin perjuicio de ampliar los fundamentos en el momento de tratarse en el recinto.

Sin perjuicio de hacer la observación pertinente en el momento de la discusión, sostengo que en el título I no debe dejarse libre a la autoridad de aplicación la determinación de cuando una empresa es pequeña o mediana. Debía fijarse claramente en el texto legal, para evitar luego sorpresas o distorsiones en el Ministerio de Economía y Servicios Públicos.

El título I es un conjunto de buenas intenciones, sin que se pueda asegurar su cumplimiento, tanto en la metodología y criterios del Poder Ejecutivo en materia de créditos. Basta leer su texto: "se facilitará", "se tenderá", "recurrirán", "dictará las normas", "pondrán en juego", "fortalecer", "priorizar", "tomará los recaudos necesarios", "se establecerá", "se diseñará", "desarrollar". Es un conjunto de buenos propósitos, que no basta su enunciación, sino que se tenga realmente la decisión de que los mismos puedan concretarse. No olvidemos aquellos que de "buenas intenciones está empedrado el camino del infierno".

El Estado tiene en sus manos los elementos y medios para concretar estos propósitos, y no lo hace. No basta entonces que ahora se reproduzcan una serie de promesas.

El título II está influido de la mentalidad economicista del actual Poder Ejecutivo. Que los capitales se encarguen, y de este modo se crea otro grupo financiero, que será el encargado de "proteger" la pequeña y mediana empresa.

Su larga y minuciosa enunciación revela que el propósito es fomentar esos grupos de capitales, so pretexto de fomentar beneficios a las PYMES. Algo parecido es lo ocurrido con los fondos creados para que grupos capitalistas monopolistas absorban y se beneficien con la construcción de viviendas y un régimen leonino de préstamos hipotecarios, y su ejecución.

Nuestra discrepancia es total en lo que se refiere al título III (artículo 83 en adelante) por entender que ello significa la liquidación de lo poco que queda del derecho laboral, luego de las últimas sanciones legislativas.

Nadie ignora el problema de las PYMES y la necesidad de adoptar medidas tendientes a su consolidación, frente a las graves circunstancias que atraviesan.

Con la mentalidad del actual Poder Ejecutivo, el único problema que afecta a estas empresas es el supuesto costo laboral, y por ello hay que destruir todo el régimen de conquistas sociales, que en algún momento colocaron a la Argentina en una situación avanzada en lo que se refiere a estos aspectos.

Pero, la crisis de las PYMES "obedece a la apertura económica indiscriminada, a la pérdida de valor agregado a los productos, el alto costo crediticio, la pérdida de poder adquisitivo del salario que deprime el mercado interno, y la alta y regresiva presión fiscal".

No es verdad que el incremento de precios se derive del alto "costo laboral" y que por ello haya que suprimir los beneficios que el trabajador adquirió luego de larga y penosa lucha. El costo se incrementa en el aspecto financiero, por la falta de crédito, los altos intereses, la usura financiera. Si no basta leer el balance de cualquier empresa grande, mediana o pequeña, para advertir que el llamado "costo laboral" incide en forma infinitamente inferior al "costo financiero", que es el verdadero causante de este incremento.

Como ha sostenido acertadamente la Fundación Alfredo Palacios "El gobierno con la complacencia de algunos sectores de la dirigencia sindical, ha enviado al Congreso un proyecto, que de ser aprobado consagrará legalmente la anulación de principios trascendentes incorporados a la legislación argentina en gran medida por la noble inspiración y la capacidad creadora de Alfredo Palacios.

"En la iniciativa gubernamental se retoman las más regresivas concepciones individualistas que parten del supuesto ficticio de una igualdad de derecho entre los hombres, desconociendo la desigualdad de hecho que existe entre quien posee otro bien que su fuerza de trabajo y quien detenta la propiedad de los medios de producción".

Y concluye: "El carácter intuitivo de los intereses del más débil, la continuidad de la relación laboral y

la irrenunciabilidad de los beneficios que la ley otorga al trabajador, constituyen el blanco contra el cual enderezan su acción los factores de poder\*.

El título III, a partir del artículo 83 no puede admitirse. Constituyen un verdadero escándalo jurídico y un atropello a derechos que están expresamente consagrados en nuestras leyes fundamentales.

Con el proyecto en discusión, se conculca el régimen de licencia anual, que queda en manos del patrón su fijación, modalidades y fecha. Cuando se señala como una causa de la crisis social el relajamiento de la vida familiar, con este sistema es posible, a voluntad del patrón, que las vacaciones del obrero no coincidan con las que se le otorgan a la esposa, o con las vacaciones escolares alterando así el vínculo familiar.

Otra barbaridad es el pago fraccionado del aguinaldo, que de este modo pierde su verdadero sentido, y se limitará a un pequeño aumento en el salario mensual, que absorberá lo que por derecho corresponde al obrero.

Se acaba la relación laboral reglada por la ley y se faculta el cambio de contratación mantenimiento y extinción del trabajo, sin ningún derecho del obrero.

Se limita el preaviso en forma arbitraria.

Todo el régimen laboral queda en manos de la parte más fuerte y sometido a la escasa o nula defensa de los trabajadores de que han dado muestra los dirigentes gremiales adscritos al gobierno y a su política económica social.

Como si fuera poco se determina que la autoridad de aplicación del título II es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tratando de este modo de cortar la vía judicial del reclamo en caso de que el obrero se considere injustamente tratado.

Todo esto es el producto de la mentalidad gubernativa. Todo al capital, y castigo a los más necesitados. No hay fondos para jubilados y pensionados, pero sí existen para pagar subsidios cuantiosos a empresas que han recibido servicio público (ejemplo ferrocarriles), o que las concesionarias de peaje también reciben subsidio a cargo de toda la comunidad, no obstante explotar en forma arbitraria y autoritaria dichas concesiones.

Por ello, y reiterando la reserva de derecho para ampliar y fundamentar mi posición en el recinto, dejo formulada la observación al Orden del Día N° 1.216.

*Ricardo F. Molinas.*

## SESIONES DE PRORROGA

1994

## Supl. (5) al ORDEN DEL DIA Nº 1216

SUMARIO: Observaciones formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, contenido en el Orden del Día Nº 1.216. Guzmán (M. C.). (70-D.O.-1994.)

Buenos Aires, 20 de febrero de 1995.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.*

S/D.

De mi consideración:

Me dirijo al señor presidente a fin de observar en el término del artículo 95 del Reglamento de la Honorable Cámara el dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda (Orden del Día Nº 1.216) por el que se establece un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas y se crea la figura jurídica de las sociedades de garantía recíproca (SGR).

El segmento empresarial destinatario de esta legislación contribuye generando aproximadamente el 40 % del producto bruto interno y ocupa más del 60 % de la mano de obra de nuestro país. Su importancia es significativa, y creo que la legislación proyectada, en su conjunto no aporta el marco jurídico adecuado para fortalecer este sector.

Por estas y otras razones que daré a conocer oportunamente en el recinto, dejo formalmente planteada mi disidencia con el dictamen de referencia.

Sin otro particular, saludo al señor presidente, muy atentamente.

*María C. Guzmán.*

## SESIONES DE PRORROGA

1994

## Supl. (6) al ORDEN DEL DIA Nº 1216

SUMARIO: Observaciones formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. Dumón y otros. (71-D.O.-1994.)

Buenos Aires, 16 de febrero de 1995.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.*

S/D.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente, con el objeto de formular observaciones al dictamen de mayoría del Orden del Día Nº 1216, despacho de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, por el que se ha considerado el mensaje 86 del Poder Ejecutivo y proyecto de ley para el establecimiento de un régimen especial para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Queremos destacar en términos generales y en primer lugar, que el proyecto en cuestión debió ser girado a la Comisión de Legislación General, en razón de las materias que trata, entre otras, modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificaciones, a lo que se agrega que el expediente 1.561-D.-93, que trata de una ley programática de creación, apoyo y expansión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas presentado por el diputado nacional (m.c.) Rodolfo Parente (Trámite Parlamentario Nº 41), reproduciendo igual proyecto del diputado nacional (m.c.) Juan Carlos Pugliese, de los años 1980 (Trámite Parlamentario Nº 84) y 1991 (Trámite Parlamentario Nº 5), se halla en estudio en dicha comisión.

Asimismo, destacamos los proyectos de ley que corren con los expedientes 1.149-D.-94, 1.150-D.-94, 4.503-D.-94 y 5.598-D.-94 presentados por el diputado José Gabriel Dumón cuyos contenidos incluyen materias tratadas por el dictamen de mayoría aquí observado.

Por otra parte, y en cuanto a las Sociedades de Garantía Recíproca que trata el proyecto del Poder Ejecutivo, el dictamen de mayoría no ha tenido en cuenta que el día 1º de diciembre de 1993 (expediente 2.585-D.-92), esta Cámara aprobó un proyecto de la misma materia que se halla a consideración del Honorable Senado desde esa fecha.

En general, el dictamen de mayoría no ha tenido en cuenta dichos antecedentes y por eso incurre en generalidades que llevan a contradicciones y a situaciones fácticas de imposible o dudoso cumplimiento cuando qu'era aplicarse la normativa proyectada.

Ello sin perjuicio de anotar que los artículos 1º, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 29 y 31 exhiben en su texto —si bien no a la letra— los proyectos sobre MIPYME citados.

Por otra parte, cabe destacar que estos proyectos no atienden a la solución del drama de las PYMES, que han perdido viabilidad por errores de la política económica, que han hecho de la Argentina el país más caro del mundo para producir. A la falta de rentabilidad de las PYMES debe agregarse el escaso crédito de corto plazo y altas tasas que las han llevado a innumerables quebrantos.

Observamos particularmente que el dictamen de mayoría en su artículo 1º no se ocupa de las "Microempresas", a pesar que en el mensaje del Poder Ejecutivo, punto II, al tratar de las Sociedades de Garantía Recíproca incluye a las mismas; y en su artículo 2º no las define y se remite a la autoridad de aplicación para ello.

Proponemos reemplazar dicho artículo por el siguiente:

Se denominan empresas Mipymes, a todos los efectos legales, a todas aquellas microempresas, pequeñas y medianas empresas, que responden a los siguientes requisitos fundamentales:

- a) Que tengan por finalidad la producción de bienes, su comercialización o la prestación de servicios;
- b) Que estén organizadas empresarialmente y operen con el trabajo profesional y/o personal de sus titulares y, eventualmente, con el trabajo de sus familiares y terceras personas;
- c) Que los titulares tengan la plena responsabilidad del patrimonio social, y asuman todos los gravámenes y los riesgos inherentes a su dirección y gestión;
- d) Que los titulares de las empresas dirijan directamente al personal dependiente, personalizando la actividad gerencial y promoviendo fluidas relaciones entre la patronal y el personal dependiente;
- e) Si la empresa MIPYME es unipersonal deberá tener, obligatoriamente organización empresarial.

La actividad agropecuaria, esencial en nuestra economía, no puede quedar ajena en la normativa proyectada, y por ello proponemos agregar al artículo 1º del dictamen de mayoría, el siguiente párrafo:

Se consideran comprendidos los micro emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas agropecuarias. A las cooperativas se las considera medianas empresas sin importar el capital de trabajo.



Proponemos asimismo incorporar al artículo 7º el siguiente texto (ver expediente 5.598-D.-94):

Los productores, deudores del Banco de la Nación Argentina, podrán acogerse al Régimen de Consolidación y Refinanciación de Deudas que se establece en la presente ley.

Se excluyen de este beneficio los beneficiarios del Régimen de Capitalización de Pasivos incluidos en el decreto 1.164/93.

Se aplicará a todos los créditos, vencidos o a vencer y que tengan como destino la financiación de cosecha, recolección de frutos, el capital de trabajo y, en general, toda suma adeudada que el productor haya destinado a la explotación.

El importe de la deuda con el Banco de la Nación Argentina se consolidará en pesos a determinada fecha con las siguientes características:

- a) Los intereses punitivos se condonan;
- b) Los pagos en pesos serán semestrales o anuales, vinculados al ciclo productivo ya sean cosechas, recolección de frutos, etcétera, en oportunidad de contar con mayores ingresos;
- c) El primer pago de intereses tendrá un año de gracia;
- d) La tasa efectiva anual de intereses, será promocional no debiendo superar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina a la que se le restarán cuatro (4) puntos porcentuales;
- e) El Banco de la Nación Argentina se hará cargo de todos los gastos por comisión, tasación, hipotecarios, prendarios, etcétera;
- f) El plazo de pago será a diez años, comenzando la amortización el sexto semestre.

El Banco de la Nación Argentina no computará para la calificación del crédito de evolución o capital de trabajo, las deudas consolidadas refinanciadas por el régimen de esta ley.

Proponemos agregar al artículo 23 el texto siguiente (ver expediente 1.150-D.-94):

Los empleadores y agentes de retención por convenios de corresponsabilidad gremial, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, que mantengan deudas con el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), podrán acogerse al Plan de Facilidades de Pago (PFP) que establece la presente ley, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el artículo siguiente.

Para acogerse al PFP, los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:

A) (*Número de empleados.*) Tener como personal en relación de dependencia, prestando servicios en las jurisdicciones que se detallan a continuación, un número de trabajadores no mayor al que en cada caso se especifica:

- a) Capital Federal y provincia de Buenos Aires ..... 499

b) Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa y Santa Fe .....	449
c) Chubut, Corrientes, Neuquén, Río Negro, La Rioja, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego .....	399
d) Catamarca, Santa Cruz y Tucumán ...	349
e) Misiones, Salta y Jujuy .....	299
f) Chaco, Formosa y Santiago del Estero ..	249

Las empresas instaladas en más de una jurisdicción no deberán sobrepasar el número máximo en ninguna de las jurisdicciones.

B) (*Carácter no monopolístico.*) No gozar de ningún monopolio legal ni de reserva de mercado u otro privilegio conferido por el Estado.

C) (*Ausencia de causas penales por delitos tributarios, previsionales o conexos.*) No haber sido objeto de querrela criminal, promovida por la Dirección General Impositiva, la Administración Nacional de la Seguridad Social, el ex Instituto Nacional de Previsión Social o las ex cajas de asignaciones familiares, fundada en la ley 23.161 (artículos 3º y 9º) y pendiente de resolución judicial a la fecha de la sanción de esta ley.

No haber sido, tampoco, objeto de querrela criminal, pendiente de resolución judicial, por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias o previsionales; ni haber dado lugar a causa penal, pendiente de resolución judicial, en la cual se hubiere ordenado el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios del Estado.

D) (*Depósito.*) Haber depositado en tiempo y forma los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial correspondiente a junio de 1994.

El PFP comprenderá las deudas por capital, actualización e intereses derivadas de:

A) (*Jubilaciones.*) Aportes y contribuciones adeudados al Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones para trabajadores en relación de dependencia.

B) (*Asignaciones familiares.*) Contribuciones adeudadas al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares.

C) (*Fondo de Empleo.*) Contribuciones al Fondo Nacional de Empleo.

D) (*PAMI.*) Aportes y contribuciones adeudadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, de acuerdo con la ley 19.032 y sus modificaciones.

E) (*Fondo de Vivienda.*) Contribuciones adeudadas al Fondo Nacional de la Vivienda, de acuerdo con la ley 21.581 y sus modificaciones.

F) (*Multas.*) Multas aplicadas en los supuestos previstos por las leyes 17.250, 22.161 y en el artículo agregado a continuación del 42 de la ley 11.683.

G) (*Moratorias caducas.*) Deudas anteriores al 1º de abril de 1991, consolidadas en planes de facilidades de pagos caducos.

Podrán incluirse en el PFP las siguientes deudas:

A) (*Declaradas.*) Las que declare el deudor.

B) (*Determinadas.*) Las que hayan sido determinadas administrativamente y sean aceptadas por el deudor.

C) (*Impugnadas.*) Las que se hubieren impugnado de conformidad con el artículo y concordantes de la ley 18.820 y el artículo 11 de la ley 21.864, modificada por la ley 23.659, siempre que el deudor desista expresa e incondicionalmente de la impugnación, así como de todo reclamo de reintegro o repetición.

D) (*Ejecutadas.*) Ejecutadas judicialmente en tanto el demandado se allane incondicionalmente si la etapa procesal lo permitiere, y en su caso desista de cualquier excepción o recurso interpuesto, asumiendo el pago de las costas.

No se incluirán, por reputárselas inexistentes, las deudas por aportes, contribuciones, multas y recargos, incluyendo obras sociales, previas al 5 de diciembre de 1991 y no verificadas administrativa o judicialmente a esa fecha, cuando el deudor se haya acogido al beneficio de la Ley de Empleo, 24.013, y haya cumplido con los requisitos del artículo 12 de dicha ley.

Las deudas anteriores al 1° de abril de 1991, que no estén comprendidas en los incisos C) y D) del artículo anterior, serán actualizadas mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel general, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las deudas posteriores al 1° de abril de 1991 se considerarán según su valor nominal, expresado en pesos, sin que pueda actualizárselas o indexárselas, ni aplicárseles quitas o recargos.

De los montos que resulten de aplicar los artículos anteriores se deducirán las sumas que, en concepto de capital e intereses, se hubiesen pagado por aplicación del decreto 611/92 o las resoluciones S.S.S.-20 del 3 de julio de 1992 y S.I.P.-39 del 14 de abril de 1993.

A) (*Consolidación.*) Las deudas que resulten de aplicar el artículo anterior se consolidarán al 30 de junio de 1994 inclusive.

B) (*Cuotas.*) Los deudores que se acojan al PFP cancelarán esas deudas en 60 (sesenta) cuotas iguales y consecutivas.

C) (*Interés.*) A las cuotas se les cargará más un interés de 0,5 % (cinco décimos por ciento) mensual sobre saldos.

D) (*Honorarios.*) Los honorarios profesionales regulados y firmes, en juicios originados en deudas comprendidas en el PFP, serán reducidos a la mitad y divididos por sesenta (60). Cada 60 avas partes constituirá una cuota, y estas sesenta cuotas, que no devengarán intereses, se abonarán simultáneamente con las cuotas del PFP.

En los juicios en los cuales aún no se hayan regulado honorarios, los jueces regularán —o las partes pactarán— esos honorarios, teniendo en cuenta el estado procesal de cada caso y tomando como

máximo la mitad del porcentaje que resulte de promediar el máximo y el mínimo previstos en la Ley Arancelaria. El monto resultante se dividirá por sesenta (60). Cada 60 avas partes constituirá una cuota, y estas sesenta cuotas, que no devengarán intereses, se abonarán simultáneamente con las cuotas del PFP.

La falta de pago en término de una de las cuotas, o de una de las obligaciones devengadas con posterioridad a la sanción de esta ley, provocará la caducidad automática del beneficio, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna. En ese caso, la totalidad de la deuda será considerada como de plazo vencido y las cuotas abonadas se tomarán como pagos a cuenta.

Las cuotas del PFP podrán pagarse en pesos o en Bonos de Consolidación de Deuda Previsional. Las cuotas de honorarios se cancelarán únicamente en pesos.

Y a continuación, también en el artículo 23, el siguiente texto (ver expediente 1.140-D.-94):

Los contribuyentes, sujetos obligados y/o responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva, que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando, en su caso, la posesión o tenencia de efectos en contravención, siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección notificada o denuncia presentada, que se vinculen directa o indirectamente con el responsable, quedarán exentos de intereses y sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. 1978 y sus modificaciones) y en la ley 23.771.

Las deudas devengadas antes del 1º de abril de 1991 serán actualizadas mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel general, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las devengadas con posterioridad serán computadas según sus montos originarios.

El Poder Ejecutivo queda facultado para fijar la fecha de vencimiento para acogerse a este régimen.

El régimen de presentación espontánea no será aplicable:

- a) A los contribuyentes y responsables contra quienes existiera denuncia formal o querrela penal por los delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o de terceros;
- b) A las obligaciones que se indican en el inciso anterior, cuando su incumplimiento guarde relación con los delitos comunes que fueran objeto de causas penales en las que se hubiera ordenado el procesamiento de funcionarios o ex funcionarios estatales;
- c) A los impuestos previstos en los artículos 23 y 23 bis, incorporados por la ley 23.102 de

la Ley de Impuestos Internos (t.o. 1979 y modificaciones) y al creado por el artículo 2º de la ley 23.562, prorrogada por las leyes 23.665 y 23.763;

- d) Al impuesto de sellos.
- e) A las actualizaciones, los intereses, las sanciones y los accesorios correspondientes a los conceptos mencionados en los incisos anteriores.

Quedan exentos de intereses, multas y cualquier otra sanción que pudiere corresponder, los contribuyentes y responsables que regularicen su situación dando cumplimiento a las obligaciones fiscales omitidas —total o parcialmente— cuyos vencimientos se hubieren operado hasta el 30 de junio de 1994, inclusive, relativas a los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Dirección General Impositiva.

Se entenderá por cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas:

- a) Cuando el tributo debe liquidarse obligatoriamente mediante declaración jurada: la presentación de ésta y, de corresponder, el pago simultáneo del gravamen y su actualización, al contado o en cuotas;
- b) Cuando se trate de impuesto cuya recaudación no se efectúe por declaración jurada: el pago al contado de la deuda y su actualización;
- c) Cuando se trate de actualizaciones pendientes de ingreso: el pago de las mismas y su actualización, al contado o en cuotas.

En caso de posesión o tenencia de efectos de contravención será necesaria la denuncia simultánea.

De regularizarse las obligaciones mediante la solicitud de planes de facilidades de pago, lo dispuesto en este artículo producirá efectos siempre que durante la vigencia de los mismos las obligaciones quedaran totalmente canceladas.

Podrán también incorporarse al régimen los anticipos con vencimiento hasta el 31 de mayo de 1994, inclusive.

No están alcanzadas por las disposiciones de este título las obligaciones fiscales cuyo vencimiento se hubiere operado hasta el 30 de junio de 1994 que se encuentren canceladas a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

La posibilidad de acogerse al régimen de presentación espontánea se pierde cuando:

- a) Se hubiera iniciado el procedimiento de determinación de oficio previsto por el artículo 23 y siguientes de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modificaciones), con la notificación de la vista respectiva, independientemente de la fecha de este acto y del estado del trámite;

- b) Exista comunicación expresa de iniciación de verificación, inspección o intimación que hubiera efectuado la Dirección General Impositiva, incluso las originadas en denuncia presentada ante dicho organismo y siempre que no hubieran transcurrido treinta (30) días corridos desde la fecha de la última intervención hasta el momento del acogimiento;
- c) Con respecto a delitos previstos en la ley 23.771, la Dirección General Impositiva, a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, hubiera formulado denuncia o iniciado querrela a los presuntos infractores, sus instigadores y cómplices y el respectivo responsable se hubiere notificado de la misma a dicha fecha.

En estos casos se excluyen de la presentación espontánea todas las obligaciones fiscales que correspondan a dichos responsables, sea que se trate de deuda propia o de terceros. Cuando, de acuerdo con lo previsto en los incisos a) y b), se produjera la pérdida de la espontaneidad la misma producirá efectos sólo con relación al tributo y período fiscal comprendido en cada caso.

Los agentes de retención y percepción quedarán liberados de multas, intereses y de cualquier otra sanción, cuando exteriorizaren y pagaren —en los términos del presente título— los impuestos actualizados que hubieran omitido retener o percibir, o que, retenidos o percibidos, no hubieran depositado o mantuvieran en su poder luego de vencidos los plazos legales respectivos.

Los impuestos retenidos o percibidos y no ingresados a la fecha de la presente ley y sus respectivas actualizaciones, no gozarán de facilidades y deberán pagarse al contado.

Cuando se trate de retenciones o percepciones no practicadas, los agentes de retención o percepción quedarán eximidos de responsabilidad si el contribuyente regularizara su situación en los términos de esta ley o lo hubiera hecho con anterioridad.

La liberación establecida por este artículo no procederá cuando en el supuesto contemplado en el párrafo anterior, los agentes de retención o percepción, se encontraran en alguna de las situaciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 4° o en el inciso c) del artículo 7°.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales omitidas podrá efectuarse mediante el pago en cuotas, conforme a las disposiciones siguientes:

- a) Las cuotas a solicitarse serán mensuales, consecutivas e iguales en cuanto al capital a amortizar, y no podrán exceder de sesenta (60);
- b) El importe de cada cuota, excluidos los intereses, no podrá ser inferior a cien pesos (\$ 100);

- c) Las cuotas devengarán un interés del 0,5 % mensual sobre saldos;
- d) En oportunidad de proponer el respectivo plan de facilidades de pago deberá ingresarse el importe de la primera cuota.

La Dirección General Impositiva podrá exigir, antes del vencimiento fijado para la primera cuota, un pago a cuenta de ésta.

Dicho ingreso provisorio será condición para la eficacia de la presentación espontánea y no podrá ser inferior al setenta por ciento (70 %) del capital que en definitiva corresponda a la cuota en cuestión.

Las obligaciones fiscales cuyos vencimientos se hubiesen operado hasta el 31 de mayo de 1994, inclusive, no comprendidas en el régimen de presentación espontánea previsto en las disposiciones del título I, excepto las indicadas en los incisos a) y b) del artículo 4º, gozarán del régimen de facilidades que se establece en el artículo 9º.

En el caso de obligaciones respecto de las cuales al 31 de mayo de 1994 se hubieren solicitado facilidades de pago de conformidad a cualquier régimen establecido al efecto y cuyos planes se encontraren o no caducos, el importe total de las cuotas vencidas e impagas a dicha fecha, incluyendo los intereses respectivos, podrá ingresarse mediante su pago en cuotas de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- a) Las cuotas a solicitarse serán mensuales, consecutivas e iguales en cuanto al capital a amortizar y no podrán exceder de treinta (30);
- b) El importe de cada cuota, excluidos los intereses, no podrá ser inferior a cien pesos (\$ 100);
- c) Las cuotas devengarán un interés del 0,5 % mensual sobre saldos;
- d) En oportunidad de proponer el respectivo plan de facilidades de pago deberá ingresarse el importe de la primera cuota.

Las cuotas del respectivo plan oportunamente solicitado cuyo vencimiento fuere posterior al 31 de mayo de 1994 deberán ingresarse conforme al mismo, no considerándose a los efectos de su caducidad los incumplimientos respecto de los cuales se soliciten las facilidades previstas en el presente artículo.

Si se tratare de obligaciones comprendidas en determinaciones y liquidaciones efectuadas por la Dirección General Impositiva, que se encuentren en discusión administrativa, contencioso administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, los responsables deberán allanarse y renunciar expresamente a toda acción y derecho, incluso el de repetición, relativos a la causa y, en su caso, abonar las costas del juicio, en la forma y condiciones que disponga el mencionado organismo.

Resulta comprendido en las disposiciones de este título tanto el importe del impuesto adeudado cuanto el de los intereses, actualizaciones y multas.

La caducidad del plan de facilidades de pago dispuesto por el artículo 9º se operará de pleno derecho sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna cuando no se ingresen dos cuotas y/o posición mensual con más la tasa de interés del 0,5 % mensual dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su vencimiento o cuando la suma de días de atraso, respecto de todas las cuotas y/o posiciones mensuales exceda los treinta (30) días hábiles por cada concepto.

Condónanse las deudas que los contribuyentes y/o responsables tengan al 31 de mayo de 1994 con la Dirección General Impositiva por el monto que no supere la suma de mil pesos (\$ 1.000). En este importe se incluye la deuda por todo concepto y a valores actualizados de acuerdo con el artículo 2º.

En los casos de responsables o contribuyentes que se hallaren sometidos a juicio de ejecución fiscal o cuando la deuda se encontrare en curso de discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial la condonación será aplicada de oficio o a pedido del interesado en la actuación o expediente.

El ingreso de los importes correspondientes a los conceptos indicados en el presente régimen deberá ser efectuado mediante depósito bancario, no aceptándose otra forma de pago que la mencionada.

La Dirección General Impositiva fijará la fecha de vencimiento del plazo para acogerse a este régimen.

Facúltase a la Dirección General Impositiva para dictar las normas complementarias que considere necesarias a los fines de la aplicación del régimen establecido por esta ley. En especial podrá establecer plazos, garantías, y demás condiciones a que deberán ajustarse las presentaciones y las solicitudes de facilidades de pago correspondientes al presente régimen.

Los honorarios profesionales regulados y firmes, en juicios con fundamento en deudas incluidas en el plan de facilidades, reducidos en un 50 %, deberán abonarse simultáneamente con el pago de cada cuota, en forma proporcional a la misma y no generarán intereses desde la fecha de consolidación y hasta su efectivo cobro.

Para el supuesto de que los honorarios no se encontrasen regulados y firmes, el deudor podrá optar por pactar el monto de los mismos con cada profesional interviniente de conformidad con la tabla elaborada en base al promedio de los porcentajes máximos y mínimos establecidos por la Ley Arancelaria para cada estado procesal reducidos en un 80 %, que como anexo I se adjunta y que forma parte integral de la presente ley.

Los agregados transcritos corresponden textualmente a los proyectos citados, a efectos de su tratamiento en



oportunidad del debate, ya que no fueron tratados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pese a que benefician especialmente a las PYMES.

En cuanto a la clasificación de empresas PYMES o MIPYME, no resulta claro ni comprensivo el artículo 83 del dictamen de mayoría y por ello solicitamos reemplazarlo por el siguiente:

Artículo 83: Las empresas MIPYME se clasifican, teniendo en cuenta el número de personas empleadas, su activo fijo, su organización empresarial, la dirección personalizada y las relaciones entre la patronal y el personal dependiente:

1. *Microempresa*: personal ocupado hasta 9 personas; activo fijo hasta 50.000 dólares.
2. *Pequeña Empresa*: personal ocupado hasta 50 personas; activo fijo hasta 250.000 dólares.
3. *Mediana Empresa*: personal ocupado hasta 100 personas; activo fijo hasta 1.000.000 de dólares.

A los efectos de la clasificación, los socios se computan al personal ocupado.

La autoridad de aplicación, evaluará, periódicamente, los requisitos necesarios que permitan la calificación y clasificación de las MIPYME, teniendo en cuenta los distintos rubros y sectores industriales, comerciales y de servicios, así como las exigencias y perspectivas socioeconómicas.

La calificación y clasificación de las empresas MIPYME, será comprobada por las constancias registrales en cada caso.

Entre las pautas de evaluación la autoridad de aplicación deberá considerar las siguientes: modo de inserción en el mercado, rama de actividad, relaciones de trabajo, composición de sus integrantes, ocupación de sus integrantes, magnitud del capital aplicado, productividad económica, capacidad de acumulación de capital, entre otras.

La clasificación y calificación que proponemos no es arbitraria y atiende a la realidad de las MIPYME de nuestro país, que presenta analogías con otros países tales como Italia, Francia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Comunidad Económica Europea, entre otros.

El dictamen de mayoría no ha avanzado en proponer y proyectar una normativa especial para el tratamiento particularizado de las empresas MIPYME en cuanto hace a las materias fiscal, previsional, laboral, sindical, crediticia y financiera, por cuanto la legislación vigente se aplica por igual a toda empresa, ya sea que se trate de una "micro" o de una "gran empresa".

Proponemos por último, un artículo 26 bis que trate de dos instrumentos o modalidades de creación o desarrollo de empresas MIPYME, los que son de uso corriente en los países citados y que han sido estu-

diados y proyectados en diversos simposios nacionales e internacionales, en la materia:

Artículo 23 bis: Tanto el sector privado, como el público, podrán establecer bolsas de subcontratación, como organismos cuya misión consta en poner en contacto los oferentes del trabajo con las empresas MIPYME, como subcontratistas capaces de realizar los trabajos que se programen mejorando así la utilización del equipamiento y facilitando la transferencia de tecnología.

Asimismo, se podrá establecer el sistema de incubadoras por el sector público, con el fin de fomentar el desarrollo comercial o industrial de un área, de una localidad o de una región, mediante el ofrecimiento de un paquete de servicios atractivos, a aquellas empresas MIPYME que estén dispuestas a trasladarse al lugar y permanecer instaladas hasta cumplir los objetivos predispuestos y programados.

También el sector privado podrá promover el sistema de incubadoras para el caso de que una empresa matriz apoye la creación y desarrollo de empresas MIPYME afiliadas, a fin de evitar que la organización matriz se anquilose o tenga rentabilidad negativa, logrando así fomentar un proceso de diversificación interna que se traduzca en mayor productividad con margen razonable de ganancias, mayor generación de puestos de trabajos y consecuentemente mayores ventas.

En este último caso, para que las empresas MIPYME así creadas, puedan gozar de los beneficios de esta ley, la autoridad de aplicación, autorizará expresamente su constitución, previa verificación de que no se da el caso de fraude legal que perjudique el interés general.

Respecto a las sociedades de garantía recíproca el dictamen de mayoría, a pesar de que en su texto traduce que ha tenido como fuente de legislación extranjera la Ley Española (Real Decreto 1.885/1978), no la menciona en su informe como así tampoco hace referencia a ella el mensaje 86 del Poder Ejecutivo.

Por ello, siguiendo dicho antecedente, así como la legislación suiza (Cooperativas de Caución), francesa (Sociedades de Garantía Mutua) e italiana (Fondi di Garanzia Collettiva - FIDI) proponemos modificar el artículo 37 del dictamen de mayoría reduciendo el número mínimo de socios partícipes. Y, por lo tanto, el tercer párrafo de dicho artículo 37 deberá expresarse así:

... toda SGR habrá de contar con un mínimo de diez (10) socios partícipes...

Señor presidente: por los motivos expuestos y por los que expondremos en oportunidad del tratamiento en el recinto, dejamos planteadas las observaciones pertinentes y lo saludamos con la mayor consideración.

*José G. Dumón. — Carlos A. Fabrisin. —  
Raúl A. Galván. — Raúl H. Vicchi.*

## SESIONES DE PRORROGA

1994

## Supl. (7) al ORDEN DEL DIA Nº 1216

SUMARIO: **Observaciones** formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. **Rico y otros.** (72-D.O.-1994.)

Buenos Aires, 21 de febrero de 1995.

Señor presidente:

Los diputados del MODIN, objetamos en su totalidad el valor instrumental del proyecto contenido en el dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, referido a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Establecimiento de un régimen especial para las mismas y creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) Orden del Día Nº 1.216.

Se deja constancia que las observaciones se han presentado en el término indicado por el artículo 95 del reglamento (vencimiento 21 de febrero de 1994), y que reflejan una disidencia total tanto en cuanto a las formas, como en cuanto al espíritu.

Nuestras observaciones van dirigidas tanto a los dictámenes de mayoría, como al de minoría: al primero por falaz, al segundo por cobarde, y porque sólo pretende dejar a salvo la responsabilidad de algunos diputados que renunciaron a las banderas del Movimiento Nacional, permitiendo el avasallamiento de los derechos de los trabajadores.

Queremos poner de manifiesto que el proyecto que pretende aprobarse, implica un verdadero cambio en materia laboral, porque si es verdad, tal como lo informa el mensaje presidencial, que el sector empresarial al que se pretende alcanzar con la regulación genera el 40 % del PBI, y ocupa más del 60 % de la mano de obra de nuestro país, eso significa, que quedarán más personas en el sistema de precarización e indefensión, que bajo el sistema general de la Ley de Contrato de Trabajo.

Significa que el orden público laboral, sólo será aplicable a una minoría, con lo que quedará desvirtuada la esencia misma del sistema.

Por eso, manifestamos que si el Congreso Nacional, aprueba este proyecto, tal como ha quedado redactado en su título III: "Relaciones de trabajo", se estarán cambiando definitivamente los principios generales de la materia, y por lo menos el 60 % de los trabajadores,

tendrá que sufrir las consecuencias de su indefensión frente a un sindicalismo, que al avalar este libelo, no ha hecho más que traicionar a sus representados.

Frente a esta actitud claudicante de un importante sector del sindicalismo, qué otra conducta podrá esperarse de estos señores, cuando negocien los convenios colectivos. Así, tomando como parámetro de su conducta reiterada el haber permitido el avance de un proyecto que conlleva un atropello de tamaño magnitud, ahora, a los trabajadores sólo les cabrá esperar: más horas de trabajo, vacaciones a capricho del empleador, movilidad indiscriminada, medidas de seguridad supeditadas a la cantidad de trabajadores, despidos arbitrarios, etcétera.

Y en materia de seguridad, lo acordado es muy grave, porque: si una actividad es peligrosa, la vida humana y la integridad física de las personas, siempre debe ser preservada de la manera más idónea: las condiciones de seguridad e higiene deben ser medidas en función de las características de cada actividad y no de pautas temporales adaptables tomando como variable la cantidad de trabajadores empleados.

#### *Ciento cinco artículos y ninguna solución al problema*

Nuevamente estamos queriendo engañar a la gente, partiendo de un diagnóstico fraguado. Otra vez, el fantasma de la desocupación está siendo utilizado como chivo expiatorio para generar grandes negocios. Pero esta vez, se ha agregado un nuevo elemento, ahora se utiliza con la misma finalidad a las PYMES, sin que sus titulares parezcan advertirlo con claridad.

El proyecto queda así integrado por tres partes bien diferenciadas, y —cada una de ellas— con un objetivo, bien distinto al que señala el mensaje, o se define en el texto.

Las tres partes son las siguientes:

I. *Disposiciones generales*: objeto del proyecto, definición de las PYMES, instrumentos, autoridad de aplicación. Esta primera parte es una suma de expresiones de deseo y de nuevas atribuciones y poderes para el Ministerio de Economía y Obras Públicas.

II. *Sociedad de garantía recíproca* (artículos 32 a 82): esta es la “gran innovación”, comparable a otras equivalentes que se han introducido a otros proyectos o leyes: las SGR, no son ni más ni menos que el sucedáneo de las AFJP (de la ley previsional) y las ART (negocios privados para asegurar riesgos por accidentes de trabajo).

Parece mentira, que por un lado se hable de disminuir costos, y del gran sobredimensionamiento del sector servicios, y por el otro, se piense en solucionar la falta de crédito que impide el crecimiento y la adaptación de las PYMES, poniendo un nuevo intermediario en el circuito, y dotándolo además de maravillosos títulos ejecutivos.

El gobierno parece borrar con el codo en este segundo título, lo que con grandilocuencia escribió en el primero, donde se da gran importancia a la “introducción de la bonificación de las tasas de interés” y a la gestión del Banco de la Nación Argentina y el Banco de

tendrá que sufrir las consecuencias de su indefensión frente a un sindicalismo, que al avalar este libelo, no ha hecho más que traicionar a sus representados.

Frente a esta actitud claudicante de un importante sector del sindicalismo, qué otra conducta podrá esperarse de estos señores, cuando negocien los convenios colectivos. Así, tomando como parámetro de su conducta reiterada el haber permitido el avance de un proyecto que conlleva un atropello de tamaño magnitud, ahora, a los trabajadores sólo les cabrá esperar: más horas de trabajo, vacaciones a capricho del empleador, movilidad indiscriminada, medidas de seguridad supeditadas a la cantidad de trabajadores, despidos arbitrarios, etcétera.

Y en materia de seguridad, lo acordado es muy grave, porque: si una actividad es peligrosa, la vida humana y la integridad física de las personas, siempre debe ser preservada de la manera más idónea: las condiciones de seguridad e higiene deben ser medidas en función de las características de cada actividad y no de pautas temporales adaptables tomando como variable la cantidad de trabajadores empleados.

#### *Ciento cinco artículos y ninguna solución al problema*

Nuevamente estamos queriendo engañar a la gente, partiendo de un diagnóstico fraguado. Otra vez, el fantasma de la desocupación está siendo utilizado como chivo expiatorio para generar grandes negocios. Pero esta vez, se ha agregado un nuevo elemento, ahora se utiliza con la misma finalidad a las PYMES, sin que sus titulares parezcan advertirlo con claridad.

El proyecto queda así integrado por tres partes bien diferenciadas, y —cada una de ellas— con un objetivo, bien distinto al que señala el mensaje, o se define en el texto.

Las tres partes son las siguientes:

I. *Disposiciones generales*: objeto del proyecto, definición de las PYMES, instrumentos, autoridad de aplicación. Esta primera parte es una suma de expresiones de deseo y de nuevas atribuciones y poderes para el Ministerio de Economía y Obras Públicas.

II. *Sociedad de garantía recíproca* (artículos 32 a 82): esta es la “gran innovación”, comparable a otras equivalentes que se han introducido a otros proyectos o leyes: las SGR, no son ni más ni menos que el sucedáneo de las AFJP (de la ley previsional) y las ART (negocios privados para asegurar riesgos por accidentes de trabajo).

Parece mentira, que por un lado se hable de disminuir costos, y del gran sobredimensionamiento del sector servicios, y por el otro, se piense en solucionar la falta de crédito que impide el crecimiento y la adaptación de las PYMES, poniendo un nuevo intermediario en el circuito, y dotándolo además de maravillosos títulos ejecutivos.

El gobierno parece borrar con el codo en este segundo título, lo que con grandilocuencia escribió en el primero, donde se da gran importancia a la “introducción de la bonificación de las tasas de interés” y a la gestión del Banco de la Nación Argentina y el Banco de

Inversión y Comercio Exterior por otro lado, lo que se está diciendo es que en realidad, las PYMES tendrán que pedir el dinero en el sistema privado, contando con los avales, que les "alquilarán" las sociedades de garantía recíproca.

Nos preguntamos qué sucedió con los programas desarrollados desde el gobierno en base a la aplicación de la ley 23.877, que tanto han sido publicitados en la revista "Paradigma" y en las Primeras Jornadas de Vinculación Tecnológica en las Universidades, celebradas en este mismo ámbito, los días 14, 15 y 16.

No estamos hablando de una entelequia, sino sobre una solución concreta, que nosotros también desarrollamos en un proyecto, y que ya estaba en funcionamiento, incluso con un objetivo mucho más amplio y estratégico.

Nos preguntamos —frente a las fuentes de financiamiento publicitadas por estos programas con participación del mismísimo Banco de la Nación Argentina y el BICE sobre desarrollo tecnológico— si ésa es la aplicación concreta de algo que ya estaba en funcionamiento, y que apuntaba directamente a las PYMES no era un instrumento más idóneo, para activar este sector tan empresario, tan golpeado.

### III. *Relaciones de trabajo*

Ya hemos dicho al principio, cuál ha sido nuestra visión sobre el tema, la preocupación que nos genera el amplio espectro de aplicación: 60 % de los trabajadores argentinos, pero lo más importante, que aún nos falta por decir, es que esta ley no generará fuentes de trabajo.

El verdadero objetivo en esta materia es seguir restringiendo el consumo. Este punto ya ha sido analizado por nuestra bancada al presentar objeciones a los proyectos de reforma laboral, y al presentar su propio proyecto alternativo con sus fases estructurales y de transición.

#### *La verdad que no se dice*

El desempleo es una variable necesaria para el funcionamiento del Plan de Convertibilidad, y por lo tanto por más que el gobierno diga que quiere combatirla la realidad indica que ello no es cierto, porque hay que restringir el consumo para mantener la estabilidad.

#### *Desocupación y modelo económico*

Sostenemos que tal como se encuentra imbricada la política económica argentina dentro del contexto mundial, todos los intentos de imponer normas de flexibilización laboral, no han sido instrumentos idóneos para reducir significativamente los costos laborales. El análisis que realizamos dejará demostrado que esta medida aislada no le devolverá al país su perfil competitivo, y en vez de permitir la creación de nuevas fuentes de empleo, la consecuencia más general sería la precarización de las relaciones laborales, poniéndole fin a este sistema de estabilidad impropia, que nos ha regido desde hace tantos años.

Nos preguntamos, hasta cuándo los argentinos vamos a seguir engañándonos, sin afrontar que nuestras PYMES, no pueden competir por razones macroeconómicas, digitadas desde el gobierno, como consecuencia de un modelo económico hecho a la medida de los centros de poder.

*Verdaderas razones de los altos costos*

Los altos costos de la economía argentina se deben a variables de mayor incidencia:

1º — Retraso cambiario en el punto inicial del plan y agravado desde esa fecha.

2º — Importaciones subvencionadas encubiertamente como consecuencia del retraso cambiario.

3º — Elevados costos financieros, los que serán cada vez más elevados en función de la crisis mundial, y de la gran crisis estructural por la que atraviesa nuestro sistema bancario donde el mismo presidente de la Nación ha reconocido que existen bancos confiables y “no confiables”.

4º — Aumentos sustanciales en el sector servicios, que parece haber quedado al margen del congelamiento, y como si fuera poco, ahora se pretende incorporar un nuevo intermediario: las sociedades de garantía recíproca.

5º — Elevada presión tributaria, sin contraprestación que la justifique.

6º — Pago de los servicios de la deuda externa, a la que se subordinan las demás.

7º — Pérdida de todas las ventajas comparativas que nos permitían colocar nuestros productos en los mercados del mundo, por las características de la producción agropecuaria, que es vendida sin procesar, y a la que se le incorpora valor agregado en el exterior en centros donde se produce con *dumping social*.

8º — Inseguridad jurídica por inestabilidad de las normas y que seguirá aumentando en la medida en que se dicten normas como éstas.

9º — Administración de justicia: hoy la justicia es cara, ineficaz e ineficiente.

Por eso, más allá de las ventajas de la “flexibilización”, declamadas en el libro escrito por el actual ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, cuando aún era asesor del anterior, Enrique Rodríguez (*La flexibilidad laboral*, ed. Bibleos, 1993), lo cierto es que el oficialismo necesita preservar a cualquier costo la estabilidad, que le ha dado tan buen resultado electoral.

La estabilidad es la llave del gobierno para la reelección del doctor Menem, por eso el ministro de Economía no puede darse el lujo de alimentar medidas que provoquen consumo, y por eso no es creíble su intención, de generar nuevas fuentes de trabajo. Al contrario, para que las cuentas sigan cerrando, necesitará cada vez más desocupados, y salarios cada vez más bajos.

Hoy nuestra realidad es una directa consecuencia de la incidencia del Plan de Convertibilidad en la economía local, y en especial del retraso cambiario, pero como bien lo ha dicho el economista Eduardo Conesa, de eso no se habla.

Y de eso no se habla, porque el objetivo de este modelo, se basa en hacernos dependientes, consumidores de sus productos obsoletos, bajo la forma de factoría próspera lo que implica destruir todo el aparato productivo, en la medida que el Estado ha pasado de una etapa de sobreprotección al sálvese quien pueda *hobbesiano*.

Este modelo económico está basado en medidas como las siguientes:

- Apertura a la importación.
- Desregulación.
- Privatizaciones.
- Equilibrio fiscal.

Con esta estructura macroeconómica, no habrá PYME que sobreviva, porque su consecuencia se empieza a ver crudamente: el costo social.

Indudablemente, este problema no parece ser una preocupación, para el equipo de mediterráneos, educados en Harvard, para servir a los intereses de las multinacionales, pero vacíos de sensibilidad social.

Hemos hecho esta alusión al modelo económico, a fin de mostrar un diagnóstico del problema, para lograr un sinceramiento de metas y objetivos, que es precisamente lo que nos ha venido negando el Poder Ejecutivo.

### *Verdadero conflicto*

Por eso, después de lo expuesto, queda claro que las PYMES argentinas no han perdido sus ventajas competitivas por el costo laboral, porque en definitiva: ésta es la variable con menos incidencia, ya que ésta representa el 12 % del costo total, y este porcentaje, es bajo, aun a nivel mundial. La verdad es que el gobierno se encuentra embretado en un serio conflicto de ribetes internacionales y frente a una disyuntiva clara: mantener la estabilidad sin crecimiento o correr el riesgo de cometer un error que funcione como detonante de una crisis.

Lo que el gobierno sigue implementando no es un modelo económico de crecimiento, como propugna el MODIN dentro de una óptica desarrollista, sino solamente de ajuste fiscal sin achicamiento del gasto público y a costa del ajuste del salario del trabajador, es decir sólo un plan antiinflacionario. Prueba de ello es que los desocupados no logran reinsertarse, y que las industrias nacionales en quiebra, constituyen un récord histórico.

Si el desempleo fuera sólo una consecuencia del devenir dinámico de la transformación empresarial, como sostiene el doctor Cavallo, la gente no tardaría mucho tiempo en reinsertarse en el mercado. Pero ello no es así, cada vez es más difícil encontrar un trabajo,



porque cada vez hay menos puestos, y la característica de la producción nacional es la recesión y el achicamiento.

Lo que no les dicen a los "sufragantes", es que no va a haber reactivación porque es peligrosa, aunque todos estén de acuerdo que la estabilidad puede salvarse, sin más costo social, con crecimiento.

### *Flexibilización laboral y puestos de trabajo*

Hasta ahora, las soluciones concertadas desde el gobierno se han regido por los siguientes lineamientos:

1º — Desconocen la trascendencia del orden público laboral y ampliar la libertad para contratar, lo que implica abrir la puerta para negociar siempre hacia abajo, aun desconociendo las mejores condiciones obtenidas en las convenciones de trabajo: más horas de trabajo, menos horas extras, falta de descansos, etcétera. Nos quieren llevar al nivel de las economías subdesarrolladas, que carecen de ética en sus relaciones sociales, obligando a trabajar por la comida.

2º — Inestabilidad en el empleo. En este punto se ha venido planteando un verdadero conflicto social, favoreciéndose sistemas basados en relaciones laborales precarias, con contratos temporales, periodo de prueba, provocando un sentimiento de desamparo e indefensión, stress permanente, desestabilización y poderoso sentimiento de exclusión del orden social. Y acá vale a pena aclarar que la profundización del desequilibrio de las fuerzas sociales no es solamente la consecuencia, sino también la causa de un modelo político que va más allá de la implementación de un modelo económico en un país en desarrollo.

No podemos seguir adelante en el análisis sin antes ver la composición actual de los mercados de trabajo, y las nuevas tendencias y las brechas tecnológicas que sólo privilegiarán a la mano de obra altamente calificada. En cambio al humilde trabajador, perparado por la escuela pública argentina cada vez más deficiente, sólo le espera una realidad: no habrá aumento sino disminución de los puestos de trabajo a los que puede acceder, para los que cada vez habrá mayor oferta laboral y menor demanda.

En este punto es interesante destacar que el gobierno se ha comprometido a capacitar a los empresarios pero, quién puede creer que vaya a capacitar a los obreros, cuando ni siquiera se ocupa de mantener en niveles aceptables a los distintos sectores de la instrucción pública, transfiriendo cada vez más la responsabilidad al sector privado.

Esta nueva composición del mercado laboral, no sólo nos está afectando a nosotros, sino a todos los modelos del primer mundo que pretendemos copiar burdamente, cuando ellos ya se han revelado como un rotundo fracaso.

En este punto, vale la pena tener en cuenta que la desocupación con las características de los países del primer mundo se refleja en las cifras siguientes:

Estados Unidos: 6,8 %.

Canadá: 12,3 %.

Francia: 11 %.

Italia: 11,5 %.

Israel: 11 2 %.

Gran Bretaña: 10,8 %.

España: 18 %.

Fuente: El Trabajo en el Mundo 1993 (OIT).

Argentina: 12 % en aumento.

Esto está sucediendo así porque los distintos Estados han olvidado su razón de ser, y han regulado a favor del capital, y desregulado, en contra del hombre. El hombre que no se identifica con su empresa, pierde sus motivaciones y el espíritu de cuerpo y de solidaridad, que permite llevar adelante grandes empresas, aunque sea a costa de sacrificios personales, cuando éstos se perciben como temporales.

### *Principio de solución*

Si el Poder Ejecutivo sólo busca convertir al país en una factoría próspera el camino escogido parece ser el correcto en la medida que somos cada vez más dependientes. Ahora bien, si queremos ser una Nación que permita el desarrollo personal de todos sus habitantes, y donde siga siendo posible la plena movilidad social basada en el esfuerzo personal, el trabajo y el sacrificio apoyado por el rol subsidiario del Estado: nos estamos cayendo por la popa.

Nuestro problema, no sólo pasa por la selección de dirigentes honestos. Para salir del círculo de la dependencia, la Argentina necesita patriotas, y necesita un modelo de país basado en el desarrollo del mercado interno. Necesita poner las inteligencias desarrolladas por sus universidades al servicio de la patria.

La Argentina tiene un gran territorio, tienen recursos materiales y recursos humanos los que tendrá que mantener adaptados a la altura de los tiempos. El Japón es uno de los países que más gasta en educación y su tasa de desocupación es del 2,4 %. Quizás ellos no nos sirvan de ejemplo, pero debemos hacer el esfuerzo por recrear un nuevo modelo, que tenga como centro al hombre, y donde cualquier habitante con voluntad de aprendizaje y de trabajo no sea privado de acceder a las más altas posibilidades.

El problema de la Argentina es el problema del mundo, y nos preguntamos por qué en vez de copiar, no tomamos la delantera en dar soluciones. La clave está en la distribución del gasto público en buena formación, el entrenamiento, la asistencia sanitaria, y la infraestructura pública —accesibles a todos los ciudadanos—. En nuestro estado, la solución no pasa por obtener más dinero, sino en invertirlo mejor, obteniendo fuerza laboral cualificada, y entrenaada para llevar adelante tareas complejas, y que pueda transferir fácilmente los resultados de su trabajo a la economía mundial, es lo que conseguirá atraer el dinero mundial para lograr ese objetivo.

Si esto no se da lo más probable es que suceda lo contrario produciendo un círculo vicioso en el que hoy nos está encerrando la política económica del gobierno: desbaratar la educación, expulsar a los técnicos, e intentar bajar el costo internacional solamente en base a

salarios bajos y desgravaciones arancelarias, lo que demuestra que toda la primera parte del proyecto, no es más que un conjunto declamativo, con un riesgo adicional: el Ministerio de Economía y Obras Públicas, se ha convertido en autoridad de aplicación con más facultades que las permitidas por el artículo 76 de la Constitución Nacional, esta situación hará más dificultoso a la Nación financiar la educación e infraestructura adecuada del futuro. Los puestos disponibles ofrecerán pocas posibilidades de formación y de experiencia para las tareas más complejas del futuro.

#### *Un nuevo sofisma*

El gobierno engaña a la población diciendo que va a crear fuentes de trabajo permitiendo la liberalización de las convenciones colectivas, porque la actual legislación laboral es obsoleta y hay que adaptarla a las transformaciones del siglo XXI. Los empresarios argentinos no pueden creer sinceramente que con medidas aisladas de este tipo, bajarán sustancialmente los costos y valdrá la pena volver a reactivar la actividad productiva.

#### *Una solución para la transición*

Los argentinos estamos en problemas. Las empresas argentinas no pueden competir, y no basta con reprocharles por los años de estancamiento, y por lo que no hicieron, necesitamos ponerlas en marcha, porque de ello depende la suerte de nuestro despegue productivo.

También necesitamos atraer inversiones, serias y estables.

Y en estos puntos juega un rol muy importante la política laboral. Los diputados del MODIN, como lo sostuvimos en los orígenes de nuestro movimiento, queremos que el advenimiento del siglo XXI, nos encuentre en plena expansión, y negociando con el resto del mundo en condiciones de igualdad, porque además de nuestro potencial humano, tenemos recursos naturales que para otros países resultan escasos.

Sabemos que los empresarios no se mueven por motivaciones interiores basadas en sentimientos altruistas, sino que invierten en los mercados donde las reglas de juego les permiten obtener ganancias, aplicando una estrategia razonable.

Somos conscientes que entre los principales factores a tener en cuenta se encuentran:

- La estabilidad y certeza jurídica.
- Una administración de justicia eficiente, eficaz y económica.

Sostenemos como premisa que una ley no necesariamente queda desactualizada por su antigüedad, y que en nuestro sistema no han sido las leyes, sino los hombres, los que al aplicarlas las han ido distorsionando, permitiendo el deterioro de las instituciones y convirtiéndolas en ineficaces.

La legislación actual, más que deficiente en su espíritu y en su contenido, podría corregirse dando mayor precisión conceptual a algunos conceptos, como por ejemplo el de injuria grave, unificando criterios, y poniendo fin a inter-

pretaciones jurisprudenciales tan diversas como existen en la actualidad. Para ello, proponemos la creación de una comisión integrada por doctores de nota, jueces del fuero y el Colegio Público de Abogados, con la idea de definir y unificar conceptos dudosos, creando presunciones legales, que faciliten las decisiones y aceleren los procesos, limitando la necesidad de pruebas.

Ello debe ser así, como parte de la implementación de un verdadero sistema de premios y castigos, porque hemos llegado al punto en que el despido sin causa ha sido utilizado por nuestros empresarios como modalidad refugio, para despedir a empleados ineptos, desleales e incumplidores, evitando los escollos emergentes de la cuota de inseguridad jurídica que significa afrontar un juicio.

### *Doble dimensión de la propuesta*

Nuestra propuesta de reforma en materia laboral, oportunamente presentada, y cuyos lineamientos reiteramos en este punto para evitar que se engañe al pueblo diciéndole que no se han propuesto alternativas:

1º — Crear una comisión de expertos a fin de encontrar soluciones efectivas:

- a) Tendientes a precisar la ambigüedad de algunos conceptos que por su imprecisión y amplitud fomentan la litigiosidad;
- b) Tendientes a modificar el juego de los límites máximo y mínimo de las tarifas indemnizatorias por despido, que hoy generan una quiebra de la proporcionalidad entre la antigüedad y la indemnización. (Se beneficia al que trabajó poco tiempo, en detrimento del que trabajó muchos años.)

2º — Establecer un plexo normativo de aplicación transitoria y caducidad automática, tendiente a hacer posible el proceso de reconversión tecnológico y organizativo de muchas empresas que necesitan adaptarse a las nuevas condiciones del sistema.

Nos resistimos a todo proyecto que no respete los siguientes paradigmas:

— Concepción filosófica del hombre, como un ser trascendente, que encuentra en el trabajo una forma de realización personal, que alcanza su plenitud en la medida en que ésta se desarrolla en una sociedad.

— Modelo de Nación cuya concreción se aspira, y donde la definición del rol del Estado y su intervención en las relaciones entre los hombres reviste fundamental importancia.

— Diagnóstico objetivo de la realidad que se pretende modificar. No es lo mismo dictar una ley para crear empleo, como pretende el MODIN, que hacerlo para favorecer el aumento de la desocupación y la recesión, como pretende el doctor Cavallo.

— Sentido común: no vale la pena repetir experiencias que en otros países resultaron ser un rotundo fracaso. Si en España el Pacto de la Moncloa llevó a una desocupación que ya supera el 20 %, no parece razonable

que los argentinos tengamos que pasar por la misma experiencia traumática. No podemos seguir copiando fracasos.

— Protagonismo del Estado en el fomento y promoción de las actividades que nos lleven a mejorar la balanza comercial.

— Responsabilidad del Estado en la calidad de los recursos humanos en base a criterios de equidad y capacidad.

— Mantenimiento del principio de "riesgo empresarial", como predominante, para determinar responsabilidades con relación a quien debe absorber las consecuencias del funcionamiento dinámico de los mercados, en permanente adaptación y cambio.

Por eso, más allá de las normas que proponemos como transición hacia la reconversión, sostenemos que no serán las leyes las que creen nuevas fuentes de trabajo, sino la acción activa del Estado, tendiente a:

— Definir pautas y posibilidades de intercambio internacional, y apuntar a esos sectores.

— Orientar el destino de la renta interna promoviendo créditos blandos, con la función de activar las pequeñas y medianas empresas, y todas aquellas actividades donde puedan obtenerse con mayores ventajas comparativas.

— Salir a buscar nuevos mercados, sin perder los que ya tenemos. La búsqueda, y los eventuales compradores, tienen que estar influidos por nuestro interés, y no quedar subordinados a los intereses de los Estados Unidos.

— Adoptar medidas, sobre todo en materia de educación que ayuden a una mayor igualdad de oportunidades mediante una más equitativa distribución de la renta nacional.

— No permitir que el Estado abdique de sus responsabilidades en materia laboral, lo que surge del artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero, que quede claro, las formas contractuales que estamos dispuestos a admitir para la coyuntura, no podrán afectar las relaciones contractuales preexistentes.

De esa manera, el sector empresario tendrá su oportunidad, y podrá reestructurarse con menores costos en materia de personal, e intentar nuevas actividades y emprendimientos.

Los diputados del MODIN, tenemos una concepción trascendente del hombre. Por eso para nosotros, hablar del trabajo, es hablar del hombre, de sus necesidades, y de sus posibilidades de realización personal y familiar, de su inserción social.

El hombre, se hace hombre por el trabajo, y necesita de él, como forma de subsistencia y también como mecanismo para desarrollar su tendencia hacia la sociabilidad y su necesidad de solidaridad.

### *El problema de las PYMES*

Además de las variables macroeconómicas que no se pueden soslayar en ningún análisis, seguimos asegurando que los instrumentos propuestos no son idóneos para promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Los instrumentos definidos en el título I, sólo sirven para dar más poder al Ministerio de Economía, que será quien defina lo que es una PYME (artículo 2º), sirven como hermosas expresiones de deseo, dan trabajo a las calificadoras de riesgo privada y a las nuevas SGR, que lógicamente cobrarán por sus servicios, se habla de crear un sistema único integrado de información y asesoramiento para las pequeñas y medianas empresas, pero no dice cómo se mantendrá presupuestariamente, da nuevas funciones al INTI y al INTA, después de haberlos desmantelado, habla del programa de desarrollo de proveedores, cuyo sentido no parece ser muy compatible con el principio cavallista de libremercado, y del Sistema Nacional de Certificación de Calidad, que más que a levantar a las PYMES, parece destinado a destruir su prestigio, pues va a ser muy difícil que puedan competir con la sofisticación de las multinacionales.

Además, conforme el artículo 22 y asumiendo funciones más propias del Ministerio de Educación, el Poder Ejecutivo se compromete a desarrollar un programa de capacitación de cuadros empresarios y gerenciales de las pequeñas y medianas empresas, algo que también parece contradecir el principio de la libertad empresarial.

Este pequeño resumen demuestra que seguimos siendo muy poco serios en materia legislativa, y que el Ministerio de Economía y Obras Públicas no ha logrado comprender la diferencia entre el voluntarismo, lo legible, y lo conveniente para la Argentina en estos tiempos donde todo el mundo está en crisis, y donde es muy difícil captar capitales para inversiones productivas.

#### *Otro proyecto alternativo y complementario del Programa de Vinculación entre la Universidad y la Empresa*

Siempre hemos preconizado el principio de subsidiariedad como base de todo el ordenamiento político, y como campo donde comienza a mostrar su responsabilidad direccional el Estado.

El proyecto que criticamos lejos de dar protagonismo a los productores privados, se lo otorga al Ministerio de Economía y a los eventuales inversores en las SGR, en detrimento del empresario productivo y del trabajador.

Nosotros observamos el proyecto oficial, por las razones expresadas, y porque nos parece fundamental centrar el eje del esfuerzo en reunir a los distintos factores sociales para generar un nuevo concepto de capitalismo nacional, repudiando todo nuevo intento de seguir regalando nuevos negocios a intermediarios. Al fin y al cabo, qué trabajo puede ser menos productivo que "alquilar avales" para que las empresas puedan conseguir crédito. Nos seguimos preguntando por qué no utilizar los bancos públicos específicos para estos emprendimientos.

Lo que se trata es de encontrar nuevas formas para generar un nuevo modelo de acumulación de la renta argentina (acumulación interna) que permita su utili-

zación en beneficio de todos. Pero ello requiere créditos a tasas razonables, plazos prolongados, capacidad de ahorro y capacidad de consumo. Para poner en funcionamiento una economía hay que poner a funcionar todos sus motores y alimentarlos de tal manera que ellos puedan mantener la economía en un nivel de equilibrio (estabilidad).

El proyecto oficial es como una lancha sin motor, le falta ver lo importante que es fomentar y realimentar el acceso a la tecnología y al desarrollo científico, en base a criterios estratégicos. El mismo gobierno parece haberse olvidado del marco creado por la ley 23.877, y también los programas complementarios, de los consejos de Planificación Universitaria Regional y en especial del Programa de Vinculación Tecnológica de las Universidades, go será que en este punto tomaría demasiada injerencia el Ministerio de Educación, y el doctor Cavallo quiere manejar todo exclusivamente desde su área?...

Necesitamos crear instrumentos de cooperación, que lleven implícitos la necesidad de integración productiva, entre el sector empresario, las PYMES, las universidades, las asociaciones profesionales y los instrumentos de crédito. Existe en la base esta idea, el diseño de un modelo de empresa basado en la participación y en la solidaridad de los distintos factores.

Nosotros tenemos en estudio una solución, que ya ha sido implementada en algunos países europeos, y que hemos denominado Sistema de Crédito con Garantía de Proyecto, donde sin dejar de priorizar la actividad privada, el Estado asume el rol de promotor y coordinador.

En este proyecto intervendrían:

1º — El Consejo Federal de Inversiones como autoridad de aplicación

2º — Las universidades nacionales y/o provinciales, que desempeñarán un rol fundamental en la evaluación de los proyectos que serán presentados para requerir créditos blandos, e intervendrán en dos etapas: preselección, intervención y aprobación definitiva. Luego de otorgado el crédito, intervendrán también en el seguimiento y control.

3º — El Congreso Nacional fijando los cupos presupuestarios y el Banco Central que fijará las reglas para los bancos operadores.

4º — Los bancos operadores serán los depositarios del certificado de garantía de proyecto.

Esto que aquí se presenta es sólo un esquema para demostrar que existen soluciones sin precarizar las relaciones laborales, y que el mismo Estado nacional había encontrado un buen comienzo en el Programa de Vinculación entre la Universidad y la Empresa, que ahora parece haber soslayado, como si se tratara de compartimientos estancos y no de un mismo país y de soluciones a los mismos problemas económicos.

Es importante destacar que en el proyecto que estamos desarrollando, y que no tuvimos oportunidad de exponer, puesto que el despacho en análisis fue firmado entre las sombras y votado sin discusión en las comisiones pertinentes, incluye como requisito que la

empresa solicitante del crédito no reciba dinero en efectivo, para evitar que se repita la historia de los empresarios que colocaban el dinero que recibían como estímulo para la producción, a tasas diferenciales en mesas de dinero y lo recibían con bajos intereses que subvencionábamos todos.

La idea es que el empresario reciba las maquinarias, los proyectos, los insumos, etcétera, y que los pagos se efectúen directamente por los bancos operadores, a los acreedores correspondientes, incluso si se tratara del pago de salarios del personal.

Con lo expuesto, queremos dejar claramente expresado, que es posible desarrollar políticas de empleo sin dejar desamparado al trabajador, y sin generar instrumentos de intermediación que se convertirán en una guillotina, para las pocas PYMES que quedan, y que no podrán competir de manera exitosa, ni en el mercado interno, ni a nivel internacional mientras siga vigente esta política antiinflacionaria, basada en la recesión y el desempleo.

*Aldo Rico. — Liliana Ayetz. — Guillermo  
C. Fernández Gilí — Emilio P. Morello.*